



JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 8 DE BARCELONA.

Procedimiento ordinario número 483/2012-A.

Partes: Camier Dos Mil, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales [redacted] y defendida por el Letrado [redacted] contra Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, representado y defendido por la Letrada de sus servicios jurídicos [redacted] y posteriormente sustituida por el Letrado [redacted] son partes codemandadas [redacted]

[redacted] D'acord Bcn, S.L., y Syra Invest, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales [redacted] y defendidas por el Letrado [redacted]

Sentencia número 6 de 2018.

En la ciudad de Barcelona, a cuatro de enero de dos mil dieciocho.

Juan Antonio Toscano Ortega, magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona y provincia, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que le confieren la Constitución y las leyes, pronuncia en nombre de Su Majestad El Rey la presente sentencia en los autos del recurso contencioso administrativo número 483/2012-A, interpuesto por Camier Dos Mil, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales [redacted]

1/32





[redacted] y defendida por el Letrado [redacted], contra Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, representado y defendido por la Letrada de sus servicios jurídicos [redacted] después sustituida por el Letrado [redacted]; son partes codemandadas [redacted]

[redacted], D'acord Bcn, S.L., y Syra Invest, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales [redacted] y defendidas por el Letrado [redacted]

La actuación administrativa impugnada consiste en la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva).

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. Por la representación procesal y defensa letrada de Camier Dos Mil, S.L., se interpone recurso contencioso administrativo, presentado en fecha 29 de noviembre de 2012, *"contra la desestimació presumpta del recurs de reposició presentat en data 23 de novembre de 2011, contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Sector 21, de Sant Andreu de la Barca"* (*"S'acompanya còpia de l'acord publicat per edicte al BOP de Barcelona de 31 de d'octubre de 2011 i còpia del recurs de reposició presentat"*).





Por decreto de 5 de diciembre de 2012 se admite a trámite el recurso, que sigue los cauces del procedimiento ordinario general previsto en la vigente Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.

SEGUNDO. Por escrito presentado en fecha 21 de febrero de 2013 se deduce la correspondiente demanda. Tras relacionar los Hechos y los Fundamentos de Derecho que estima aplicables, el Letrado de la mercantil actora concluye con el suplico al Juzgado que *"dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso, se disponga": "Primero.- Que los actos recurridos son contrarios al ordenamiento jurídico, y que por tanto deben ser anulados dejándolos sin efecto". "Segundo.- Que se condene al Ayuntamiento a rectificar el Proyecto de Reparcelación recurrido y, consecuentemente a reiterar el trámite de información pública previamente a su nueva aprobación definitiva, los siguientes aspectos del Proyecto de Reparcelación por ser contrarios al ordenamiento jurídico": "a) Fecha de inicio del expediente de reparcelación: 15 de julio de 2003". "b) Fecha de referencia de las valoraciones efectuadas: 15 de julio de 2003. Lo que comportará que la normativa de valoración aplicable sea la Ley 6/1998". "c) Supresión de los coeficientes c) y d) a efectos de determinar la participación de las diferentes propiedades en los costes de urbanización". "d) Exclusión de la imputación a la comunidad reparcelatoria de los costes de urbanización correspondiente a los sistemas generales tales como el encauzamiento del Canal Sedó o la ampliación del Parque que se efectúen fuera del ámbito del Sector". "e) Incorporación a la cuenta de liquidación provisional de las cantidades percibidas hasta la fecha por el Ayuntamiento, ya sea en concepto de cuotas de urbanización o de contraprestaciones convenidas con sus correspondientes intereses". "f) Reconocimiento de Camier Dos Mil, S.L. como titular del derecho de crédito que ostenta de 2.873.056,49 Euros más los correspondientes intereses devengados desde la fecha de la primera aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación".*





"g) Que este derecho de crédito, del que es titular mi mandante, debe constar en la casilla K <Despeses anticipades> del Cuadro n. 4: <Compte de Liquidació Provisional> del Proyecto de Reparcelación aprobado inicialmente, en la fila A correspondiente a la Comunitat de Propietaris 75.1-75.28 (Finca Matriz 15844); de tal modo que se aplique proporcionalmente a todas las entidades de la finca 75 hasta alcanzar un saldo de o para cada entidad, procediéndose a entregar el saldo diferencial que resulte a mi mandante, toda vez que una vez satisfechos los gastos de urbanización se habrá extinguido la prenda constituida en favor de Coperfil Group". "h) Condena al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca al pago de los intereses devengados por las cuotas de urbanización percibidas en base al Proyecto de Reparcelación declarado nulo, desde la fecha de su percepción hasta la fecha en que de conformidad al nuevo Proyecto de reparcelación sean giradas a los adjudicatarios de la fincas. Reconocimientos de dichos derechos de crédito de los adjudicatarios correspondientes en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación". "Tercero.- Que se condene en costas al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, por temeridad y mala fe, si se opusiera a las justas pretensiones de esta parte".

TERCERO. La Letrada municipal, en el escrito de contestación a la demanda presentado en fecha 30 de marzo de 2012, expone los Hechos y Fundamentos de Derecho que considera de aplicación y acaba por interesar del Juzgado el dictado de "sentència que desestimi íntegrament el recurs presentat per la representació de la mercantil Camier Dos Mil, SL, i, en aquest sentit, que declari conforme a dret el Projecte de Reparcel·lació del sector 21, aprovat definitivament el 4 d'octubre de 2011; que no condemni en costes a aquesta administració, i que denegui la prova proposada per l'actora relativa a l'aportació del dictamen pericial del senyor [redacted] ni el seu testimoniatge".





CUARTO. Por decreto de 4 de abril de 2013 se fija la cuantía del recurso en indeterminada. Por auto de 24 de abril de 2015 se recibe el pleito a prueba, con pronunciamiento sobre las pruebas propuestas. Tras la práctica de las pruebas admitidas, las representaciones procesales letradas de las partes actora, demandada y codemandadas presentan escritos de conclusiones en fechas 25 de noviembre, 22 de diciembre de 2015 y 8 de enero de 2016, respectivamente. Por providencia de 29 de junio de 2017 se declaran conclusas las actuaciones, quedando pendientes del dictado de sentencia en fecha 12 de julio de 2017.

QUINTO. En la tramitación de los presentes autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo aquellas que por razones estructurales de sobrecarga de asuntos pendientes de resolución ante este Juzgado han devenido de imposible cumplimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. Constituye objeto del presente recurso la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva).

SEGUNDO. En la demanda rectora de autos, Camier Dos Mil, S.L., a través de su Letrado interesa del Juzgado el dictado de "*dicte sentencia por la que, estimando*





el presente recurso, se disponga": "Primero.- Que los actos recurridos son contrarios al ordenamiento jurídico, y que por tanto deben ser anulados dejándolos sin efecto". "Segundo.- Que se condene al Ayuntamiento a rectificar el Proyecto de Reparcelación recurrido y, consecuentemente a reiterar el trámite de información pública previamente a su nueva aprobación definitiva, los siguientes aspectos del Proyecto de Reparcelación por ser contrarios al ordenamiento jurídico": "a) Fecha de inicio del expediente de reparcelación: 15 de julio de 2003". "b) Fecha de referencia de las valoraciones efectuadas: 15 de julio de 2003. Lo que comportará que la normativa de valoración aplicable sea la Ley 6/1998". "c) Supresión de los coeficientes c) y d) a efectos de determinar la participación de las diferentes propiedades en los costes de urbanización". "d) Exclusión de la imputación a la comunidad reparcelatoria de los costes de urbanización correspondiente a los sistemas generales tales como el encauzamiento del Canal Sedó o la ampliación del Parque que se efectúen fuera del ámbito del Sector". "e) Incorporación a la cuenta de liquidación provisional de las cantidades percibidas hasta la fecha por el Ayuntamiento, ya sea en concepto de cuotas de urbanización o de contraprestaciones convenidas con sus correspondientes intereses". "f) Reconocimiento de Camier Dos Mil, S.L. como titular del derecho de crédito que ostenta de 2.873.056,49 Euros más los correspondientes intereses devengados desde la fecha de la primera aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación". "g) Que este derecho de crédito, del que es titular mi mandante, debe constar en la casilla K <Despeses anticipades> del Cuadro n. 4: <Compte de Liquidació Provisional> del Proyecto de Reparcelación aprobado inicialmente, en la fila A correspondiente a la Comunitat de Propietaris 75.1-75.28 (Finca Matriz 15844); de tal modo que se aplique proporcionalmente a todas las entidades de la finca 75 hasta alcanzar un saldo de o para cada entidad, procediéndose a entregar el saldo diferencial que resulte a mi mandante, toda vez que una vez satisfechos los gastos de urbanización se habrá extinguido la prenda constituida en favor de

6/32





Coperfil Group". "h) Condena al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca al pago de los intereses devengados por las cuotas de urbanización percibidas en base al Proyecto de Reparcelación declarado nulo, desde la fecha de su percepción hasta la fecha en que de conformidad al nuevo Proyecto de reparcelación sean giradas a los adjudicatarios de la fincas. Reconocimientos de dichos derechos de crédito de los adjudicatarios correspondientes en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación". "Tercero.- Que se condene en costas al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, por temeridad y mala fe, si se opusiera a las justas pretensiones de esta parte". Posteriormente, en conclusiones finales se acaba solicitando del Juzgado el dictado de "sentencia por la que se estime el presente recuso de conformidad al suplico del escrito de demanda, salvo por lo que se concierne a los pedimentos d) y g) sobre los cuales se desiste en el presente trámite".

A las pretensiones y los motivos del recurso se opone en la contestación a la demanda la Letrada municipal, que interesa del Juzgado el dictado de "sentència que desestimi íntegrament el recurs presentat per la representació de la mercantil Camier Dos Mil, SL, i, en aquest sentit, que declari conforme a dret el Projecte de Reparcel·lació del sector 21, aprovat definitivament el 4 d'octubre de 2011; que no condemni en costes a aquesta administració". Y en conclusiones finales acaba interesando del Juzgado que "dicti sentència que desestimi el recurs presentat per la representació de la mercantil Camier Dos Mil, SL, i, en aquest sentit, que declari conforme a dret el Projecte de Reparcel·lació del Sector 21, aprovat definitivament el 4 d'octubre de 2011, en relació amb el qual només cal adequar-lo a les determinacions de la Sentencia de 10 de maig de 2013; i que no condemni en costes a aquesta Administració".





En conclusiones finales, el Letrado de los codemandados interesa del Juzgado el dictado de "*sentencia de conformidad a Derecho*".

TERCERO. Se trata la precitada resolución judicial de la sentencia número 376/2013, de 10 de mayo de 2013, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (recurso de apelación número 317/2012), cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "*PRIMERO. Estimar el recurso de apelación formulado Camier Dosmil S.L. contra objeto el auto dictado el 28 de junio de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona , que se revoca*". "*SEGUNDO. Acordar la ejecución forzosa de las sentencias de 29 de junio de 2009 y 23 de junio de 2010 , con la adecuación del nuevo instrumento de gestión aprobado a sus determinaciones en cuanto al marco normativo aplicable, Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, Ley 3/1998, de 13 de abril, y Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y en relación al reconocimiento del derecho de la aquí apelante de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo calor se ha fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales, rechazando las demás pretensiones*". "*TERCERO. Sin expresa condena en costas*". Se reproducen seguidamente sus Fundamentos de Derecho Primero a Séptimo:

"*PRIMERO. Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el recurso de apelación tiene por objeto el auto dictado el 28 de junio de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona , que resuelve que no ha lugar a acordar la ejecución de la sentencia nº 551/2010, de 23 de junio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , confirmatoria de la sentencia nº 186/2009, de 29 de junio de 2009 , dictada por este Juzgado en los presentes autos, por haber sido cumplida en sus justos términos.*

El auto apelado indica que siendo que la sentencia que se pretende ejecutar se limita a estimar el recurso y declarar la nulidad del Proyecto de reparcelación aprobado el 28 de junio de 2005 por la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de Sant Andreu de la





Barca, ha de entenderse ejecutada por la Administración, resolviendo por ello denegar la ejecución solicitada.

El recurso de apelación se sustenta en las siguientes consideraciones jurídicas: 1. Incumplimiento de lo establecido en el artículo 103.4 de la LJCA ; 2. Se ha de comprobar que la nueva reparcelación resultante de la ejecución de la sentencia da cumplimiento a los extremos de la misma en cuanto a: coeficientes de ponderación aplicados; reconocimiento del derecho de crédito a favor de Camier Dosmil, S.L.

En el súplico del escrito de interposición del recurso de apelación se solicita que se revoque el auto apelado y se dicte resolución por la que se acuerde la procedencia del incidente de ejecución de sentencia y en consecuencia: a) se declare la procedencia de la aplicación de los coeficientes homogeneizadores establecidos en el proyecto de reparcelación, al tratarse de una reparcelación económica un, ajustándose en consecuencia los porcentajes de participación de las diferentes fincas adjudicadas en los costes de urbanización; b) se requiera al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a fin de que proceda a rectificar el contenido del Proyecto de reparcelación en el sentido de: 2b) reconocer como fecha de inicio de la reparcelación la fecha correspondiente a la anterior aprobación inicial y en consecuencia modificar el marco normativo de aplicación en esa fecha; 2b) reconocer el derecho de crédito de 2.200.000 euros a favor de Camier Dosmil, S.L. y que se aplique el mismo , de forma proporcional a todas las fincas/departamentos de la finca 75 (adjudicadas a Coperfil Group, S.A.) de la cuenta de liquidación provisional "fins assolir un rossec de 0 euros per cada identitat, procedint-se a liquidar a favor de Camier Dosmil, S.L. el diferencial que romanguí respecte dels costos que resultin del compte de liquidació provisional".

SEGUNDO. El auto apelado se dicta en ejecución de la sentencia número 551/2010 dictada el 23 de junio de 2010 por esta Sala y Sección en el rollo de apelación sentencia 366/2009 , que desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona , que estimaba el recurso formulado contra el acuerdo adoptado el 11 de abril de 2006 por la Junta de Govern del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca que aprobaba definitivamente el Proyecto de reparcelación del sector 21, anulándolo.

Ni en una ni en otra sentencia se recoge indicación de que la estimación del recurso conlleve la elaboración de un nuevo Proyecto de reparcelación ajustado a las consideraciones recogidas en las propias sentencias, pudiendo la Administración demandada optar por esa solución o por modificar el Proyecto de reparcelación impugnado en las determinaciones que alcanzan a la recurrente, pero en uno y otro caso deberá estar a las determinaciones recogidas en las sentencias citadas.

TERCERO. El derecho de toda persona a la tutela efectiva de los Tribunales, consagrado en el artículo 24 de la CE, integra no sólo el derecho a la obtención de una sentencia firme, sino también a que sea llevado a efecto lo decretado en la indicada resolución,





exigencia ejecutiva categóricamente afirmada en el artículo 118 de la Norma Fundamental española ((ATS de 12 de junio de 1990).

El artículo 109 de la LJCA faculta a la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución.

Como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de octubre de 2007 , con remisión a otra de 9 de octubre de 2007, " no es cierto que la sentencia que anula un acto administrativo no tenga nada que ejecutar. Esa sentencia expulsa de la vida jurídica al acto anulado, y en ejecución de la misma el Tribunal sentenciador puede controlar e impedir que la Administración demandada pretenda ejecutar el acto anulado o quiera deducir de él cualquier tipo de efectos ".

Los autos recaídos en ejecución de sentencia no pueden resolver cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla, pero el hecho de que la sentencia que se ejecuta no contenga pronunciamiento sobre las consecuencias de la anulación del acto recurrido no es obstáculo en su apreciación y así lo expresa el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de mayo de 2004 , en la que se recoge: " A este respecto, ha de decirse que poco importa que el fallo de la sentencia a ejecutar se limitara a anular el acto administrativo impugnado, sin ordenar expresamente ninguna de aquellas dos posibles actuaciones, pues es también doctrina constitucional la que integra en el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias la llamada garantía de interpretación finalista del fallo, que infiera de él todas sus naturales consecuencias. Así, en la STC número 148/1989 (FJ 4) y en otras, como las SSTCC 125/1987 (FJ 2) y 92/1988 (FJ 2), puede leerse: «...el Juez de la ejecución ha de apurar siempre, en virtud del principio pro actione, del de economía procesal y, en definitiva, de su deber primario de tutela, la posibilidad de realización completa del fallo, infiriendo de él todas sus naturales consecuencias en relación con la causa petendi, es decir, de los hechos debatidos y de los argumentos jurídicos de las partes, que, aunque no pasan literalmente al fallo, como es lógico, si constituyen base para su admisión o rechazo por el juzgador y, por ello, fundamento de su fallo, del cual operan como causas determinantes. Lo cual, es obvio, no supone que se puedan ampliar en fase de ejecución de Sentencias los términos del debate o hacerse otras pretensiones distintas, ampliando indebidamente el contenido de la ejecución, cosa que la Ley ordinaria ya prohíbe al prever un recurso al respecto (artículo 1.687.2º LECiv.). Simplemente implica que la interpretación y aplicación del fallo de la Sentencia no ha de ser estrictamente literal, sino finalista (artículo 3 CC) y en armonía con el todo que constituye la Sentencia. Sólo así, se dice en la STC 167/1987 , se garantiza la eficacia real de las resoluciones judiciales firmes y, por ende, del control jurisdiccional sobre la Administración, y sólo así pueden obtener cumplida satisfacción los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos, que resultaría incompatible con la tutela eficaz y no dilatoria que deben prestar los órganos judiciales, los cuales deben interpretar y aplicar las Leyes en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental» ".





Procede, pues, estimar el recurso de apelación para revocar el auto apelado, para seguidamente entrar a resolver sobre la cuestión de fondo planteada, referida a la ejecución forzosa de las sentencias dictadas.

CUARTO. El incidente en el que se dicta el auto apelado tiene su origen en el escrito presentado el 20 de enero de 2012 por la parte actora, en el que se pide se inicie incidente de ejecución forzosa de sentencia, refiriendo que la Administración en lugar de corregir el Proyecto de reparcelación recurrido había aprobado el 6 de octubre de 2011 un nuevo Proyecto sin tener en cuenta las determinaciones y el contenido de las sentencias dictadas en relación a los coeficientes de homogeneización y el reconocimiento del derecho de crédito de la recurrente, solicitando que se declarara la improcedencia de la aplicación de los citados criterios y que se requiriera a la Administración la rectificación del Proyecto aprobado definitivamente en el sentido de: reconocer como fecha de inicio de la reparcelación la fecha correspondiente a la anterior aprobación inicial y en consecuencia modificar el marco normativo de aplicación en esa fecha; reconocer el derecho de crédito de 2.200.000 euros a favor de Camier Dosmil, S.L. y que se aplique el mismo, de forma proporcional a todas las fincas/departamentos de la finca 75 (adjudicadas a Coperfil Group, S.A.) de la cuenta de liquidación provisional "fins assolir un rossec de 0 euros per cada entitat, procedint-se a liquidar a favor de Camier Dosmil, S.L. el diferencial que romangui respecte dels costos que resultin del compte de liquidació provisional".

En el fundamento de derecho tercero de la sentencia que se ejecuta de fecha 23 de junio de 2010 atiende al contenido de otra sentencia, de fecha 28 de julio de 2008, que declaró nulo el Proyecto de reparcelación del sector 21, sentencia confirmada en apelación por sentencia de 20 de abril de 2009 recaída en el recurso de apelación 343/2008, indicando que en esa sentencia se señaló que "la normativa aplicable al caso es la contenida en la Llei 2/2002 de urbanismo de Catalunya con las modificaciones efectuadas por la Llei 10/2004, pero no el Decret Llegislatiu 1/2005 que aprobó el texto refundido ulterior, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria octava de aquella Llei. Por otro lado, en sede de valoración es aplicable la Ley 6/98 sobre Régimen de Suelo y Valoraciones y no la posterior Ley 8/07 del Suelo ni su Texto Refundido aprobado por R.D. leg. 2/2008".

Y efectivamente, en la sentencia de 29 de junio de 2009 se indica que se "el Proyecto de Reparcelación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 28 de Junio de 2005 habida cuenta que si bien inicialmente se aprobó en fecha de 15 de Junio de 2003, a causa de las múltiples alegaciones en aquel formulado, en el que se evidenciaban defectos de importancia, y en el que se admitieron parcialmente las alegaciones formuladas, se ordenó iniciar los trabajos de revisión del contenido del proyecto de reparcelación y someterlo de nuevo a información pública". En esa fecha era de aplicación la Ley 2/2002, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre.





El hecho de que en ejecución de sentencia se haya tramitado y aprobado otro proyecto equidistributivo no modifica la referencia del ordenamiento jurídico aplicable de forma que su contenido deberá ajustarse a las determinaciones de la normativa citada.

QUINTO. Sobre los coeficientes homogeneizadores aplicados en el Proyecto de reparcelación resuelve la citada sentencia de 23 de junio de 2010 en su fundamento de derecho quinto, con remisión también a la sentencia de 29 de abril de 2009, señalando:

" En cuanto a la violación del principio de presunción de validez de los actos procesales, efectivamente existe tal presunción legal contemplada en el art. 57 de la LPAC 30/92 derivada del principio general recogido en el art.3 del mismo texto de que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Pero, como tal presunción, puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario y ello es lo que ha hecho la parte actora en el presente caso según razona pormenorizadamente la sentencia de instancia, sin que en el recurso de apelación se dedique una sola línea a discutir sus conclusiones; sólo se habla de la incongruencia de la condena en costas por no haber aportado prueba alguna para mantener el Proyecto de reparcelación cuando en el Juzgado a quo se le había inadmitido la prueba solicitada como más documental IV, sobre certificación del arquitecto municipal en relación con los coeficientes homogeneizadores; es de ver que dicha prueba se le rechazó por la razón formal de que podía haberla aportado junto con la contestación a la demanda, pero en cuanto al fondo resulta evidente que dicho certificado habría insistido en la corrección de los coeficientes homogeneizadores aplicados, cuando lo determinante en este caso es que, una vez combatidos, sólo una prueba pericial procesal podría desvirtuarlos y la practicada en el presente caso ha puesto de manifiesto su disconformidad a derecho y ha convencido al Juez a quo, lo cual coincide por otro lado con lo contemplado y resuelto en la sentencia citada de 29 de abril de 2009 recaída en el rollo de apelación 343/08 que también confirmó la condena en costas; podrá no gustarle al Ayuntamiento la redacción del fundamento octavo de la sentencia apelada, pero lo fundamental del mismo es que ha apreciado temeridad por defender un instrumento de gestión que ha resultado a todas luces vulnerador del principio rector de distribución de beneficios y cargas ".

Sobre este particular resuelve en su fundamento de derecho quinto la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 9 número 186, de 20 de junio de 2009, contra la que se interpuso el recurso que resuelve la sentencia de 23 de junio de 2010 de esta Sala u Sección, indicando:

"Dicho lo anterior resuelta que una Reparcelación económica, como la presente, no se realizan cambios de suelo sino que se centra en las cesiones de aquellos calificados como sistemas con destino a uso publico considerando el perito que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 2/2002 que establece: A efectos de la gestión urbanística, la ponderación del aprovechamiento urbanístico en un ámbito de actuación urbanística o de desarrollo urbanístico, tanto si son sectores de planeamiento urbanístico como polígonos de actuación urbanística, ha de ajustarse a la siguiente regla:





Si el ámbito de actuación comprende varias zonas, se ha de establecer el valor relativo homogeneizado de cada una de ellas.

Los valores homogeneizados a que se hace referencia en la letra a) han de expresar la intensidad de los usos, la rigidez a la demanda de cada uno de los usos, su localización y la repercusión admisible del valor de la urbanización o, en su caso, reurbanización.

Bajo esta consideración se ha analizado por el técnico tras el análisis de las diferentes calificaciones establecidas en el PERI y que el Proyecto de Reparcelación desarrollo y el Proyecto de Urbanización y las obras culmina, concluye que el proyecto en cuestión es singular ya que partiendo del coeficiente de ocupación, para el que el perito no encuentra base alguna para los coeficientes aplicados por este concepto a los distintos tipos de suelo, partiendo efectivamente que sólo existen dos usos el comercial y el industrial, resulta que el suelo más penalizado en el PERI es el que se le asigna la clave 11d-SC ; respecto al coeficiente de usos , entiende que si ya se aplicó un coeficiente de intensidad de usos, volver a aplicar otro no justificado con base alguna por el uso del suelo es una duplicidad que desvirtúa cualquier realidad y si para el caso que los redactores del proyecto entendieron la aplicabilidad de dicho coeficiente para establecer las diferencias de valor , entre el suelo industrial y el comercial , dicha diferencia es la misma que refleja el coeficiente de rigidez en la demanda concluyendo que el referido coeficiente no puede ser aplicado tal y como se ha hecho en el proyecto .

Respecto al coeficiente de centralidad partiendo que la Ley nada dice respecto a este coeficiente considera el perito que la diferencia de valor del suelo comercial con respecto al industrial , no puede ni debe ser compensada por un coeficiente de localización , totalmente arbitrario y que se desconoce su origen , respecto al coeficiente de rigidez de la demanda de cada uso pone en duda la aplicación de mismo al no haber encontrado estudio alguno , anexo a la memoria que demuestre los argumentado por el técnico del ayuntamiento en el sentido que Per la seva determinació han estat analitzades diverses operacions de compra-venda de terrenyes de similars característiques en l'entorn metropolità , cercan sempre les condicions més aproximades a les presents no tiene cada uno de los coeficientes para no llegar a soluciones erróneas , consecuentemente se puede llegar a la conclusión que no se aplica en el proyecto de reparcelación el principio equitativo de cargas y beneficios por cuanto que del proyecto resulta , con la aplicación cumulativa de los coeficientes homogeneizadores que los propietarios del suelo calificado con la clave 11d-6 tienen una repercusión de e/m de superficie muy superior a los propietarios que tienen un uso industrial común como los de la clave 11d-SC ello deducido del cuadro comparativo siguiente:

Zona 11d-SC Zona 11d-6

Suelo Adjudicado 5.794,36 19.490,47 m2

Coste Urbanización 41.898,76 € 1.732.040,69€

Repercusión 7,231 €/m 88,866€/m

Concluyéndose como ya se ha anticipado anteriormente que el suelo más penalizado es el que se le asigna la clave 11d SC".





Como es de ver, ni una ni otra sentencia declara la improcedencia de la aplicación en el Proyecto de reparcelación de cualquier criterio de ponderación, sino que rechazan los coeficientes utilizados por las disfunciones y desigualdades que generan. Luego, la pretensión de la parte ejecutante de excluir en la nueva ordenación cualquier coeficiente no encuentra amparo en esas sentencias que se ejecutan, por lo que no puede ser atendida, máxime cuando no se acredita la disconformidad a derecho de los nuevos criterios recogidos en el nuevo instrumento de gestión

SEXTO. En el fundamento de derecho sexto de la sentencia de 23 de junio de 2010 se recoge:

"En cuanto al reconocimiento de la obligación de que en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación se refleje la cantidad de 2.200.000 euros, con sus intereses, como gastos de urbanización anticipados y a cuenta, a compensar a quien resulte propietario de la finca aportada nº 75 contemplada en el convenio urbanístico de 28 de abril de 2000 conforme a su estipulación cuarta, se alega en el recurso de apelación que la sentencia incurre en falta de motivación. Basta su mera lectura para comprobar que la motivación o justificación de la decisión es cumplidísima; distinto es que la parte apelante discrepe con las consideraciones de la Juez a quo, que es lo que realmente se quiere defender bajo el título tan inadecuado de "infracción del principio de motivación".

Finalmente debe puntualizarse, por un lado, que tanto en el contrato de compraventa de 15 de noviembre de 2004 entre la actora Camier Dos Mil, S.L. y la entidad Coperfil Group S.A., como el ulterior contrato de compraventa entre las mismas partes de 22 de febrero de 2005 (al que tanto alude el Ayuntamiento) se pactó que las cuotas y gastos de urbanización serían a cargo de la vendedora, deduciéndose del precio las cantidades que al respecto resulten de la liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación. En consecuencia queda probado el interés de la actora en el pleito por más que la liquidación y las compensaciones se realicen con quien resulte propietario de la finca, quedando en la esfera civil los pactos privados al respecto. Por otro lado, la sentencia apelada ha puesto de manifiesto, en base a la prueba pericial, la realidad de la existencia y utilidad de las obras de urbanización realizadas por la actora, para cuya valoración el perito procesal ha cotejado las facturas que le ha presentado el promotor concluyendo que ascienden a 2.873.056,49 euros (la sentencia en el fundamento sexto ciñe la cantidad a 2.200.000 euros seguramente por congruencia con lo pedido en la demanda); pues bien, respecto de las facturas de que parte el perito, explicadas en el folio 50 y ss. de su dictamen (fol. 611 de las actuaciones judiciales) nada expone el Ayuntamiento apelante, que se limita a considerar insuficientes los anexos acompañados a la demanda, cuando el perito explica que no ha partido de ellos, sino de las facturas expresamente reclamadas por él, sin que tampoco el Ayuntamiento, en ningún momento, haya alegado ni intentado demostrar que las obras existentes y útiles no ascienden a dichas sumas.

Por otro lado, en el fundamento de derecho sexto de la sentencia de 29 de junio de 2009, que confirma en apelación la anterior se expone:





"Por lo que respecta a las obras de urbanización no existe duda alguna que en el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad Anmamaisa SA el 28 de Abril de 2000 para el desarrollo y gestión del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca se estipuló que la totalidad de los honorarios devengados por los trabajos encargados a Anmamaisa SA y soportados supondrá un crédito total a su favor, o en su caso a favor de Camier Dosmil SL o de quien en aquel momento sea propietario a compensar por las cargas que como propietario de parte del Sector 21, le correspondan en concordancia a su coeficiente de participación que resulte del proyecto de reparcelación. Presentados los gastos al Ayuntamiento este acordó el 27 de de Agosto de 2003 establecer que los gastos de urbanización anticipadas del sector 21 del PGO realizadas por Camier Dosmil S.L ascienden a la cantidad de 1.077,02 euros IVA incluido cantidad que tiene la condición de provisional y a cuenta hasta la aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación del Polígono, así como compensar esta cantidad por las cuotas urbanísticas que como propietario resulten del Proyecto de Reparcelación del Sector 21 , en el coeficiente de participación que le corresponda.

Consecuentemente estos gastos deben ser repercutidos entre los diferentes adjudicatarios en proporción al valor de las fincas y ello en la consideración que la totalidad del sector 21, deviene beneficiada de esa actuación urbanística.

Se ha comprobado que los trabajos realizados consistieron en el derribo de las naves industriales existentes, el soterramiento y entubamiento del Canal Sedo que exigieron el desecado y la excavación de la zanja de dicho canal para encauzarlo en un tubo especial rectangular; la instalación de servicios , como albañales estación transformadora, conducciones eléctricas de la urbanización así como la construcción de la vía, sobre el enterramiento de dicho canal, cuya parte inferior se utiliza como parking fue completado encontrándose todas las instalaciones hoy en día funcionando .Consecuentemente no se puede obviar ya no solo la realización de las obras sino los gastos que generaron y que además el Ayuntamiento reconoció por eso, no le es dable negar tal evidencia so pena de incurrir en ir contra los propios actos, facturación y gastos de gestión y que asciende junto con el justificante de los gastos aportados por Camier Dosmil SL al Ayuntamiento de San Andreu de la Barca el 26 de Julio de 2004 la cantidad de 2.200.000 euros cantidad que junto con los intereses debe reflejarse en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación, prueba concluyente junto con la realidad de las obras, careciendo de sentido la impugnación que hace el Ayuntamiento rayano a lo absurdo en cuanto que la entidad actora no ha aportado las facturas ni los justificantes de pago".

Sobre el titular se ese crédito resuelve la sentencia citada en último lugar en su fundamento de derecho segundo al expresar:

"En este sentido puede afirmarse que la obligación de abono de los gastos de urbanización, tiene un doble elemento: como derecho de crédito, y como garantía de pago del mismo, a cuyo fin queda afecta la finca, y dicho derecho de crédito lo ostenta la actora en virtud del Convenio Urbanístico para el desarrollo y gestión del sector 21 del Plan General de Ordenación suscrito el 28 de Abril de 2000 entre la actora subrogándose en la posición de la entidad Anmamaisa S.A y el Ayuntamiento de San Andreu; la primera cláusula del mentado convenio consigna que las figuras y trabajos a desarrollar son: El





levantamiento topográfico actualizado de todo el sector, Plan Especial de Reforma Interior del Sector, Reparcelación y Proyecto de Urbanización , trabajos todos ellos realizados por la actora y reconocidos por el Ayuntamiento de San Andreu el 23 de Septiembre de 2003 especificando que per unanimitat s'acorda :Establir que les despeses anticipades del sector 21 del PGO , realitzades per Camier Dosmil S.L puguen a la quantitat de 1.077.357,02 IVA inclòs , quantitat que té la condició de provisional i a compte fins l'aprovació del compte de liquidació definitiva de la Reparcel·lació del polígon. Reconèixer a Camier Dosmil S.L aquesta quantitat a compensar per les quotes urbanístiques que com a propietari resultin del projecte de reparcel·lació del sector 21 , en el coeficient de participació que s'escaigui.

Y sin que la venta efectuada a Coperfiel Group signifique que ha habido una cesión del crédito como sostiene el Ayuntamiento pues tal como se desprende el acreedor es la misma entidad ello deducido por la estipulación cuarta de la calendada escritura, en la que se especifica que aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación y a la vista de la valoración de las obras de urbanización ejecutadas anticipadamente en el sector y de la estimación provisional de aquellas otras pendientes de ejecución, e incluyendo los demás denominados " gastos de urbanización " se deducirá del precio o de la cantidad retenida la cantidad que resulte de la cuanta de liquidación provisional en el Proyecto de reparcelación aprobado deduciéndose asimismo cualquier cantidad adeudada por la vendedora a la compradora, incluido cualquier pago que adeudare al Ayuntamiento por razón de los convenios suscritos con el mismo, sin que signifique que se haya operado subrogación alguna por parte de la compradora en aquellas obligaciones. A pesar de la evidencia el Ayuntamiento yerra al considera que en virtud del artículo 1205 del Código civil no se puede sustituir al deudor Coperfil Group sin el previo consentimiento del Ayuntamiento acreedor, porque confunde dos institutos distintos: la cesión de créditos y la novación subjetiva por cambio de deudor, debe recordarse que en la cesión de créditos que no ha existido en el presente caso no se exige ningún consentimiento del deudor cedido para su validez y eficacia, sólo la perfección del negocio de cesión entre cedente del crédito y cesionario".

La ejecución de esas sentencias exige que el nuevo instrumento de gestión urbanística se ajuste a sus determinaciones, atendiendo a las obras de urbanización ejecutadas de forma anticipada por la aquí apelante que han resultado útiles, a la que se le debe reconocer su valor, fijado en las sentencias en 2.200.000 euros, más sus intereses, a repercutir en la comunidad reparcelatoria.

Procede, pues, estimar el recurso de apelación para revocar el auto apelado, acordando la ejecución forzosa de las sentencias antes citadas, lo que comporta la adecuación del nuevo instrumento de gestión aprobado a sus determinaciones en cuanto al marco normativo aplicable, Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, Ley 3/1998, de 13 de abril, y Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y en relación al reconocimiento del derecho de la aquí apelante de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo calor se ha fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales, rechazando las demás pretensiones.





SÉPTIMO. De conformidad con lo recogido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, estimado el recurso no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas".

Y por la mercantil actora se aporta a las actuaciones la sentencia número 333/2017, de 6 de junio de 2017, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (recurso de apelación número 296/2015), cuyo fallo es del siguiente tenor literal: *"Estimar el present recurs d'apel·lació núm. 296/2015, promogut per Caboel, S.L amb l'oposició de L'Il·lm Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i, conseqüentment"*: "1.- Revocar i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 61, de 26 de març de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 263/2012-A i, en el seu lloc", "2.- Estimar el susdit recurs contenciós administratiu i, per tant, anul·lar el Projecte de reparcel·lació del Sector 21 del Pla general de Sant Andreu de la Barca i, alhora, els acords municipals de 4 d'octubre de 2011 i 17 d'abril de 2012, a través dels quals l'esmentat Projecte equidistributiu va ser aprovat definitivament i va ser confirmat en reposició". "3.- Disposar que L'Il·lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramiti i aprovi un nou Projecte de reparcel·lació, sotmès en llurs determinacions a la legislació vigent en data 28 de juny de 2005; projecte, aquest, el compte de liquidació del qual haurà d'incorporar i prendre en consideració, per afegitó, les quotes d'urbanització ingressades per l'Ajuntament com a conseqüència o a compte dels instruments d'equidistribució del Sector invalidats amb anterioritat " y "4.- Condemnar L'Il·lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a estar i a passar pels precedents pronunciaments". "Sense costes". Se reproducen seguidamente sus Fundamentos de Derecho Primero a Octavo:

"PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 263/2012-A, promogut per Caboel, S.L contra L'Il·lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona dictà la Sentència núm. 61, de 26 de març de 2015, en virtut de la qual desestimà la demanda deduïda per l'actora amb motiu de l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Sector 21 del Pla general (Acord de





la Junta de Govern Local, de 4 d'octubre de 2011, confirmat en reposició en data 17 d'abril de 2012).

SEGON: La Sentència recaiguda en primera instància resolgué el litigi en els termes que segueixen:

"Primer.- Objecte del recurs

La part actora recorre l'acord de la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pres en sessió ordinària de 17 d'abril de 2012 que resol desestimar el recurs de reposició presentat el 24 de novembre de 2011 per l'actor contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector 21, de 4 d'octubre de 2011, en els termes de l'informe jurídic transcrit a la part expositiva d'aquest acord.

Les alegacions que realitza la part actora davant del mateix les passem a analitzar.

Segon.- Data de referència per fer les valoracions del sòl.

No son fets discutits que abans del projecte que ens ocupa, es va aprovar un d'anterior que va ser declarat nul per la sentència dictada per la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya de 29 d'abril de 2009, que referint-se a la data que sha de tenir en compte per procedir a les valoracions en un projecte de reparcel·lació ha de ser la data d'aprovació inicial del projecte i no la data d'aprovació de delimitació del polígon d'actuació, llevat que " la fecha de delimitación, en su momento de la unidad de actuación, y antes u ahora de la del polígono de actuación, sea en la más próxima cercanía a la de la aprobación inicial del instrumento equidistributivo que concurra".

Per tant, i en aplicació d'aquest raonament i de l' article 131 del Reglament de la Llei d'Urbanisme entenc que la data a tenir en compte és la de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació que ens ocupa, és a dir, la 20 de desembre de 2010. Si seguim les argumentacions de la part actora anem en contra del contingut de les sentències recaigudes sobre la mateixa qüestió.

Tercer.- Aplicació dels coeficients d'homogeneització.

És un fet admès que no va ser possible realitzar una reparcel·lació física atesa la consolidació del sector per l'edificació, extrem que ens duu a una reparcel·lació econòmica.

La part actora entén que no es poden aplicar els coeficients d'intensitat d'usos, de rigidesa a la demanda de cadascun dels usos i el coeficient de repercussió admissible del valor de la urbanització. Si bé, en l'escrit de conclusions ho limita als dos últims.

La part demandada manifesta que cadascun dels coeficients es troba justificat al punt 3.3 de la Memòria del Projecte de reparcel·lació. Així, i en relació al coeficient de rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, el document justifica que el valor unitari del sòl segons els usos permesos al polígon és significativa i, com a base d'aquesta afirmació, el document conté un estudi de mercat, amb més de 25 mostres de diverses operacions de compravenda de terrenys o construccions acabades el més aproximades possible a les existents al sector. I respecte al coeficient de repercussió admissible del valor de la urbanització es diu que la raó de l'aplicació d'aquest coeficient ve justificat a la memòria del Projecte de reparcel·lació quan s'explicita que aquest factor corrector pren importància en aquesta reparcel·lació en la mesura que el Pla especial de reforma interior estableix una reserva per a sistema viari adreçat a donar servei al sòl apte per a ús comercial concentrat, que planteja uns costos unitaris d'urbanització superiors als de la resta del polígon.

La part actora per provar aquests fa extensiva la pericial judicial realitzada pel Sr.

presentada en el procediment administratiu seguit en el Jutjat contencios administratiu núm. 9 de Barcelona recurs 583/2006 referit a l'anterior projecte de reparcel·lació i no el que ens ocupa, i que va servir de fonament per declarar la nul·litat de l'anterior mitjançant sentència de . Ara bé, si examinem la mateixa, el cert és que es realitza tenint per objecte un projecte de reparcel·lació diferent que el que ens ocupa, sí que és cert que analitza l'aplicació del diferents coeficients homogeneitzadors, però també ho és que el projecte que ens ocupa, fa una





aplicació diferents del mateixos, inclús deixa d'aplicar un d'ells que és el coeficient de localització. La part actora manté que els vigents tenen la mateixa finalitat que els anteriors, però no ho prova atès que manca prova en aquest aspecte, ja que l'única prova pericial existent en el present procediment, i que és la que va proposar la part actora té per objecte un projecte de reparcel·lació diferent.

Altrament, la part demandada aporta un informe dels serveis tècnics municipals (document núm. 10 de la contestació) que justifica l'aplicació d'aquests coeficients al nou projecte, tenint en compte el punt 3.3 de la Memòria del Projecte de Reparcel·lació, extrem que no ha estat desvirtuat per la part actora amb cap prova.

Quart.- Despeses d'urbanització

La part actora manifesta que al llarg dels 40 anys des de la delimitació del sector pel planejament general, els diferents operadors instal·lats a l'àmbit van anticipar cessions de sòl amb destí viari i l'execució d'obres d'urbanització necessàries pels funcionament de les seves activitats. Afegeix que el fet que en la redacció del projecte de reparcel·lació anterior es prescindís del projecte d'urbanització va impedir valorar la situació de les mateixes i ha fet que ja sigui per via judicial o per via conveni apareguin en el compte de liquidació unes indemnitzacions per execució d'obres anticipades que increment els costos d'urbanització a imputar a la massa reparcel·latòria. No concreta aquestes obres, si bé acte seguit manifesta que l'Ajuntament ha incorporat a la massa reparcel·latòria el cost de sistemes generals aliens al Sector com el endegament del Canal Sedó, o l'execució de la rotonda de l'autovia amb la vialitat del sector mitjançant les calçades laterals dimensionades en funció del nou rol. I finalment agrega que si bé el projecte de reparcel·lació té en compte la divisió en règim de propietat horitzontal operada en virtut de llicència d'obres atorgada a Coperfil Group, S.A, també s'ha de dir que l'atorgament d'aquesta llicència s'havia de condicionar a la prestació d'una garantia equivalent al 100 % de les despeses d'urbanització imputables.

Davant d'aquestes alegacions fàctiques, mancades de tot argument jurídic l'Administració al·lega que en compliment dels articles 120 del TRLU i de l'article 127.2 RLU les despeses d'urbanització a repartir entre els propietaris són les previstes en el projecte d'urbanització del sector 21, aprovat definitivament el 24 de juliol de 2007 per la Junta de Govern local de l'Ajuntament i el Projecte d'urbanització complementari del sector 21 d'endegament d'un tram del canal Sedó, aprovat definitivament el 15 de febrer de 2011 per la Junta de Govern local. Aquest Projecte d'urbanització conté identificades, valorades, quantificades i justificades les despeses d'urbanització les quals es contenen en el Projecte de reparcel·lació del sector 21. Juntament amb l'informe del Serveis Tècnics municipals quan conclou que les obres d'urbanització són de característiques i qualitats properes als estàndards realitzables en aquest tipus de sòls.

El Projecte d'urbanització referit va ser impugnat judicialment, i aquest va ser estimat parcialment per la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona de data 18 de febrer de 2010, en el sentit d'excloure del mateix determinades actuacions que no han de ser incloses en les despeses d'urbanització, llevat, diu les referents al Canal Sedó i el Parc Central els costos dels quals sí que han d'estar inclosos en el projecte.

Respecte a la petició que realitza la part actora d'inclusió en el compte de liquidació provisional dels imports ja satisfets pels diferents propietaris, l'article 144 RLU d) que regula el contingut de la memòria del projecte de reparcel·lació que inclou la justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació amb especificació de les partides que es fixen a continuació, no si fa cap esment. Altra cosa serà que s'hagin de fer constar en el compte de liquidació definitiva a l'empara de l'article 162 RLU, i òbviament a l'hora de liquidar les quotes urbanístiques d'acord amb el nou projecte s'ha de comptar amb aquests pagaments fets.

Respecte a l'alliberació de l'afectació dels departaments corresponents als diferents propietaris pels costos d'urbanització, com bé assenyala la part demandada, l'article 127 TRLU





I en darrer terme tenim la petició relativa a les quotes urbanístiques, no ho puc admetre atès que estem davant d'actes administratius diferents que no han estat impugnats, fet diferent és el relatiu a les compensacions i regularitzacions que s'hagi de fer amb els propietaris del sector tenint en compte els imports ja satisfets d'acord amb el projecte de reparcel·lació que es va declarar nul, com abans he manifestat."

TERCER: Caboel, S.L pretén que aquest Tribunal revoqui la Sentència d'instància i, ahora, estimi el recurs contenciós administratiu deduït en el seu dia; pretensions, aquestes, a les qual s'hi ha oposat la defensa lletrada de L'Il·lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, no sense suggerir subsidiàriament una estimació parcial.

Tot seguit, exposarem els diferents extrems de la controvèrsia i farem una síntesi de la posició de cadascuna de les parts:

" 1: Data de referència per a la valoració del sòl:

1.1: Tesi de l'apel·lant:

-En la mesura que el Projecte de reparcel·lació de 4 d'octubre de 2011 (PR 2011) pretenia substituir i superar les irregularitats del Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 28 de juny de 2005 i definitivament l'11 d'abril de 2006 (PR 2006) -les quals van determinar que fos declarat nul per Sentència d'aquest Tribunal-, la valoració del sòl havia de prendre com a data de referència la de l'aprovació inicial del PR 2006.

-Aquesta tesi vindria abonada per la solució donada a un supòsit similar per la Sentència núm. 496/2014, de 18 de setembre, d'aquesta Sala i Secció.

-D'altra banda, es porta a col·lació la Sentència núm. 376, dictada per aquesta Sala i Secció en l'apel·lació núm. 317/2012, els fonaments i el veredictes de la qual van ser els que segueixen (subratllarem els extrems que consirem d'especial interès):

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

(...)CUARTO.- El incidente en el que se dicta el auto apelado tiene su origen en el escrito presentado el 20 de enero de 2012 por la parte actora, en el que se pide se inicie incidente de ejecución forzosa de sentencia, refiriendo que la Administración en lugar de corregir el Proyecto de reparcelación recurrido había aprobado el 6 de octubre de 2011 un nuevo Proyecto sin tener en cuenta las determinaciones y el contenido de las sentencias dictadas en relación a los coeficientes de homogeneización y el reconocimiento del derecho de crédito de la recurrente, solicitando que se declarara la improcedencia de la aplicación de los citados criterios y que se requiriera a la Administración la rectificación del Proyecto aprobado definitivamente en el sentido de: reconocer como fecha de inicio de la reparcelación la fecha correspondiente a la anterior aprobación inicial y en consecuencia modificar el marco normativo de aplicación en esa fecha; reconocer el derecho de crédito de 2.200.000 euros a favor de C..., S.L. y que se aplique el mismo, de forma proporcional a todas las fincas/departamentos de la finca 75 (adjudicadas a C...G, S.A.) de la cuenta de liquidación provisional "fins assolir un rossec de 0 euros per cada entitat, procedint-se a liquidar a favor de C..., S.L. el diferencial que romanguí respecte dels costos que resultin del compte de liquidació provisional".

En el fundamento de derecho tercero de la sentencia que se ejecuta de fecha 23 de junio de 2010 atiende al contenido de otra sentencia, de fecha 28 de julio de 2008, que declaró nulo el Proyecto de reparcelación del sector 21, sentencia confirmada en apelación por sentencia de 20 de abril de 2009 recaída en el recurso de apelación 343/2008, indicando que en esa sentencia se señaló que "la normativa aplicable al caso es la contenida en la Llei 2/2002 de urbanismo de Catalunya con las modificaciones efectuadas por la Llei 10/2004, pero no el Decret Llegislatiu 1/2005 que aprobó el texto refundido ulterior, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria octava de aquella Llei. Por otro lado, en sede de valoración es aplicable la Ley 6/98 sobre Régimen de Suelo y





Valoraciones y no la posterior Ley 8/07 del Suelo ni su Texto Refundido aprobado por R.D. leg. 2/2008".

Y efectivamente, en la sentencia de 29 de junio de 2009 se indica que se "el Proyecto de Reparcelación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 28 de Junio de 2005 habida cuenta que si bien inicialmente se aprobó en fecha de 15 de Junio de 2003 , a causa de las múltiples alegaciones en aquel formulado , en el que se evidenciaban defectos de importancia, y en el que se admitieron parcialmente las alegaciones formuladas , se ordenó iniciar los trabajos de revisión del contenido del proyecto de reparcelación y someterlo de nuevo a información pública". En esa fecha era de aplicación la Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre.

El hecho de que en ejecución de sentencia se haya tramitado y aprobado otro proyecto equidistributivo no modifica la referencia del ordenamiento jurídico aplicable de forma que su contenido deberá ajustarse a las determinaciones de la normativa citada.

(...)

SEXTO.-(...) La ejecución de esas sentencias exige que el nuevo instrumento de gestión urbanística se ajuste a sus determinaciones, atendiendo a las obras de urbanización ejecutadas de forma anticipada por la aquí apelante que han resultado útiles, a la que se le debe reconocer su valor, fijado en las sentencias en 2.200.000 euros, más sus intereses, a repercutir en la comunidad reparcelatoria.

Procede, pues, estimar el recurso de apelación para revocar el auto apelado, acordando la ejecución forzosa de las sentencias antes citadas, lo que comporta la adecuación del nuevo instrumento de gestión aprobado a sus determinaciones en cuanto al marco normativo aplicable, Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, Ley 3/1998, de 13 de abril, y Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y en relación al reconocimiento del derecho de la aquí apelante de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo calor se ha fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales, rechazando las demás pretensiones.

SEPTIMO.- De conformidad con lo recogido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, estimado el recurso no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:

PRIMERO

Estimar el recurso de apelación formulado Camier Dosmi, S.L. contra objeto el auto dictado el 28 de junio de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona , que se revoca.

SEGUNDO

Acordar la ejecución forzosa de las sentencias de 29 de junio de 2009 y 23 de junio de 2010 , con la adecuación del nuevo instrumento de gestión aprobado a sus determinaciones en cuanto al marco normativo aplicable, Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, Ley 3/1998, de 13 de abril, y Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y en relación al reconocimiento del derecho de la aquí apelante de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo calor se ha fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales, rechazando las demás pretensiones

TERCERO

Sin expresa condena en costas."

1.2: Rèplica de l'Ajuntament:

-Malgrat reconèixer que la Sentència d'aquest Tribunal, de 10 de maig de 2013 , obligava a refer el projecte de reparcel·lació declarat nul (el PR 2006) sota el marc normatiu anterior al text refós de

21/32





2005 de la Llei d'urbanisme, l'Ajuntament es veié en la necessitat de formular un projecte *ex novo*, susceptible de respondre a les circumstàncies canviants constatades dins l'àmbit d'execució. Un projecte de reparcel·lació sotmès, per tant i sense condicionaments previs, a les determinacions del text refós de 2010 de la Llei d'urbanisme (TRLU 2010) i de la legislació estatal coetània en matèria de valoracions.

-Tot i que com a pretensió principal es sol licita la desestimació de l'apel·lació, com a pretensió subsidiària es demana o suggereix una estimació parcial, amb el mandat afegit d'adequar el PR als criteris indicats per aquesta Sala i Secció a través de la Sentència de 10 de maig de 2013, sens perjudici de desestimar la resta de pretensions de l'actora/apel·lant.

2: Sobre els coeficients d'homogeneïtzació:

2.1: Tesi de l'apel·lant:

-Ens trobem al davant d'una reparcel·lació econòmica en la qual no s'haurien d'aplicar coeficients d'homogeneïtzació.

-Amb posterioritat al litigi d'instància, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona declarà nul·la la 17ª modificació puntual del Pla general de Sant Andreu de la Barca (procediment ordinari 644/2011), de la qual en porta causa directa el PR 2011.

-Els coeficients aplicats en el present supòsit no han fet altra cosa que amagar o dissimular l'aplicació del coeficient de localització invalidat amb motiu de la impugnació del PR 2006. Han estat penalitzades indegudament les parcel·les més properes al casc urbà en benefici de la resta de parcel·les industrials, i la Sentència apel·lada no ha captat aquesta circumstància.

2.2: Rèplica de l'Ajuntament:

-Els coeficients d'homogeneïtzació van ser incorporats al PR 2011 de conformitat amb allò que disposaven els art.126.1.b) i 37.5 TRLU.

-Tots aquests coeficients es troben perfectament justificats a través del punt 3.3 de la Memòria del PR 2011 en els termes que segueixen (veure l'informe dels Serveis Tècnics Municipals adjuntat amb l'escrit de contestació a la demanda):

Intensitat d'usos o edificabilitat, segons valors aplicables a l'edificabilitat prevista.

Ocupació, segons la capacitat de cada propietari d'utilitzar més espai en planta, atès el valor residual de la planta pis.

Rigidesa a la demanda, de conformitat amb els diferents valors unitaris del sòl segons l'ús atribuït pel planejament.

Repercussió admissible del valor de la urbanització com a factor corrector d'una reserva per a sistema viari especialment beneficiosa per al sòl comercial concentrat.

-En cap cas ha estat aplicat el coeficient de localització.

3: Sobre la consignació de les quotes satisfetes:

3.1: Tesi de l'apel·lant:

-L'art. 144 del Reglament del text refós de la Llei d'urbanisme (RU), en referir-se al contingut del projecte de reparcel·lació no esmenta les quotes avançades perquè parteix de la hipòtesi habitual, en la qual no serà normal que s'avancin diners abans de l'aprovació del projecte d'equidistribució. La qual cosa no vol dir que si aquest fet s'ha produït, el seu resultat no s'hagi de reflectir a l'expedient de reparcel·lació.

-En el present supòsit, es van pagar quotes derivades del PR 2006, i aquesta circumstància ha de quedar degudament documentada; entre d'altres coses, perquè les afectacions registrals associades al saldo provisional, no esdevinguin sobrevalorades.

-De no haver estat denegada la prova documental proposada, s'hauria pogut demostrar que l'Ajuntament havia recaptat una quantitat superior a la inversió pública efectuada.

-La solució donada per la Sentència apel·lada no és satisfactòria: no és suficient amb poder deduir les quantitats satisfetes amb motiu de les noves liquidacions de quotes, o amb poder solucionar aquest problema a través de la liquidació definitiva de la reparcel·lació. S'escau que el compte de





liquidació provisional es faci ressò de les quantitats ja satisfetes i dels interessos meritats en favor dels propietaris concernits.

3.2: Rèplica de l'Ajuntament:

-Ni en primera instància ni en apel·lació han estat declarades com a ingrés indegut les quotes d'urbanització ja satisfetes. Com tampoc ha estat admès que una conseqüència directa de la nul·litat del PR 2006 hagi de ser la de la devolució d'aquestes quotes.

-Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 10 de juliol de 2012 es va posar en marxa un procediment per tal d'efectuar les compensacions i regularitzacions oportunes. No és necessari que aquestes operacions esdevinguin part integrant del PR 2011.

-D'altra banda, els al·legats de l'apel·lació associats al retret sobre la recaptació de les quotes d'urbanització i sobre un suposat excés al respecte, són qüestions noves que no es contemplaven a la demanda i que, per tant, no podran ser objecte d'aquesta apel·lació.

4: Sobre l'alliberament de la càrrega registral d'afecció al pagament de despeses d'urbanització envers les finques adjudicades 75 i 84:

4.1: Tesi de l'apel·lant:

-Per identitat de raó amb les previsions que es contenen en els art. 33 i 34 del Decret 303/1997, de 25 de novembre, la Sentència d'instància hauria d'haver admès que sobre les parcel·les adjudicades 75 i 84 no havia de constar cap afecció en seu registral perquè quan l'Ajuntament atorgà les llicències d'obres i d'activitats corresponents, exigí del promotor la constitució d'una garantia bancària associada directament al pagament de les despeses d'urbanització vinculades a les dites parcel·les.

-Davant d'una situació com aquesta només hi cabien dues solucions: suprimir l'afecció en seu registral, o bé consignar en el PR 2011 l'existència de la garantia bancària per tal de relaxar o flexibilitzar el gravamen sobre la propietat."

QUART: Quant a la pretensió de l'actora, relativa a l'alliberament de la càrrega registral que grava les parcel·les 75 i 84, haurem de dir que el fet que les despeses d'urbanització corresponents puguin estar assegurades per una garantia dipositada en el seu dia per un promotor interessat en avançar l'obtenció de sengles llicències, no constitueix excusa per tal d'excepcionar l'aplicació del règim jurídic de la reparcel·lació; el qual, en aquest punt, ha prescrit des d'antic que "L'acord d'aprovació d'un projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes econòmics i jurídics reals següents: (...)b) L'afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació..." (art. 121 de la Llei d'urbanisme, en la versió aplicable al cas).

D'altra banda, ens trobem amb una confluència de garanties de naturalesa diferent i compatibles entre si; sense que la garantia real reparcel·latòria es pugui veure ni tant sols matisada per l'existència de l'altre instrument d'assegurament. Instrument, aquest últim, la subsistència o pertinença del qual es troba extramurs d'aquest procés.

CINQUÈ: La mateixa sort haurà de córrer la pretensió relacionada amb els coeficients d'homogeneització.

Certament, el jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona dictà una Sentència que declarava nul el planejament que donava cobertura al Projecte de reparcel·lació (procediment ordinari núm. 644/2011); tanmateix, aquesta Sentència ha estat recentment revocada per aquesta Sala i Secció (apel·lació núm. 356/2014) amb els arguments que exposarem tot seguit:





"SETÈ: Pel que fa a la part del veredictes dictat en primera instància a través de la qual es declarà la nul·litat del planejament urbanístic que atorgava cobertura al Projecte de reparcel·lació del Sector 21 del Pla general d'ordenació urbana aprovat l'any 2011 per L'ASAB (en endavant, PR), les apel·lacions hauran de prosperar.

La Sentència apel·lada no aprecià cap vici en el PR que fos conseqüència necessària o inevitable de les determinacions del planejament urbanístic pròpiament dit.

En cap moment es digué o es justificà que l'assignació d'usos comercials o no industrials fos contrària a dret. Com tampoc es declarà il·legal la delimitació de l'àmbit de gestió.

Tots els retrets que la Sentència assumí com a propis en mèrits del dictamen pericial judicial, tenien a veure amb els criteris emprats pel PR per tal de distribuir internament les càrregues urbanístiques; i cap d'aquests criteris dimanava del planejament, sinó de la interpretació feta per l'Ajuntament de les normes legals i reglamentàries que disciplinaven l'estadi relatiu a la gestió urbanística.

Per tot això, ja podem anunciar la revocació del pronunciament anul·latori al qual ens estem referint. No sense afegir, a títol de simple comentari, la nostra sorpresa pel fet que una Sentència dictada per un Jutjat hagi oblidat que aquests òrgans jurisdiccionals unipersonals no poden incloure en els seus veredictes pronunciaments anul·lators del planejament urbanístic. Poden anul·lar actes administratius d'aplicació o execució si consideren que el planejament de cobertura és il·legal; però la invalidació definitiva d'aquest planejament es troba reservada a aquesta Sala, via apel·lació o via qüestió d'il·legalitat [art. 8.1, últim incís; 10.1.b); 27.1; i 81.2.d) LJCA].

VUITÈ: De les apel·lacions flueix una queixa relacionada amb la valoració de les proves feta pel jutgador d'instància, i aquesta queixa haurà de ser acollida, perquè la Sentència apel·lada (veure el seu fonament jurídic segon) és reveladora d'un criteri oposat al que ens obliga, a Jutjats i Tribunals, a valorar les proves de forma conjunta i de conformitat amb les regles de la sana crítica. Una cosa és que la pericial judicial "prima facie" hagi d'inspirar una major confiança que les pericals de part o que altre tipus de proves; i una de molt diferent que la presència d'una pericial judicial exoneri el jutgador del seu deure de contrastar el conjunt de les proves i de mantenir un esperit crític, fins i tot amb les pericals judicials.

En el nostre cas, les referències que fa la Sentència apel·lada a l'alta qualificació de la pèrit i al caràcter fonamentat del seu dictamen (també ho podria haver dit de l'arquitecte municipal que emeté un informe al qual ens referirem més endavant), no deixen de ser expressions retòriques que no fan més que precedir una assumptió acrítica de les conclusions de la susdita facultativa. I aquesta manera de procedir suposa un trencament greu de les regles de valoració, que aquesta Sala haurà de corregir.

NOVÈ: La Sentència apel·lada dóna per fet que el PR incorporà indegudament les despeses que havien estat invalidades per la Sentència núm. 55, de 18 de febrer de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona; però si hagués contrastat el PR amb l'informe emès sobre aquest extrem, en data 25 de maig de 2012, per l'arquitecte municipal (document 8 de la contestació a la demanda presentada per L'ASAB), hauria pogut constatar que això no era així; i que les diferències apreciades en un primer moment, s'haurien esvaït després d'homogeneitzar els conceptes comparats i de comprovar que allò que havia succeït no era més que el resultat de traslladar al PR el pressupost d'execució material rectificat pel Jutjat 11, afegint-li (cosa perfectament legítima) conceptes tals com el benefici industrial, les despeses generals i l'I. V. A.

DESÈ: Acte seguit passarem a analitzar aquells aspectes de la pericial judicial que la Sentència apel·lada hauria acollit com a fonament de la seva decisió.

A: Sobre el coeficient o factor de localització:

La pericial considerarà que el PR (al qual denominà reiteradament "pla de reparcel·lació") hauria omès indegudament la ponderació del valor de les finques resultants en funció de llur localització. Tanmateix la pericial perdé de vista que estava analitzant una reparcel·lació "econòmica" de la qual no s'havia de derivar cap desplaçament o canvi d'ubicació; la qual cosa exclouia d'arrel

24/32





l'aplicació del factor "localització". No debades, l'art. 140.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme (RU), aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, especificava clarament que l'aplicació d'aquest factor únicament procediria "quan la indicada localització difereix substancialment de la de les finques aportades" de tal sort que la ubicació de les finques resultants produeix "una diferència relativa de valor". Altrament dit: quan d'haver coincidit la localització de la finca de resultat amb la localització de la finca aportada, la primera hauria tingut un valor substancialment diferent que en el cas d'haver estat situada en un altre indret.

Com és de veure, l'art. 140.2 RU establí dues condicions cumulatives, la primera i essencial de les quals (localització substancialment diferent de la finca de resultat), en el nostre cas no es donava, amb independència que el valor de les finques de resultat s'hagués pogut veure afectat per altres motius.

B: Sobre el coeficient o factor de repercussió de la urbanització:

El PR assignà un coeficient 1 als sòls beneficiats per un nivell més alt d'urbanització (ús comercial essencialment) i un coeficient 0,85 a la resta (sòl industrial principalment).

La perít judicial considerà que aquests coeficients no es justificaven en cap estudi; i amb dades extretes de L'Agència Tributària de Catalunya i de la revista "EME Dos" (any 2012) arribà a la conclusió que els coeficients correctes eren el 0,80 per al sòl industrial (amb urbanització de qualitat mitjana) i l'1 per al sòl comercial (amb urbanització de qualitat bona).

Amb un resultat de la pericial judicial sensiblement distant dels coeficients establerts pel PR, potser hauria estat justificada una Sentència limitada a rectificar aquest extrem del PR; però no podem dir el mateix amb uns resultats pericials tant aproximats a les dades de l'expedient reparcel·ladori. Dades que necessàriament s'escau situar l'any 2010 (el de l'aprovació inicial del projecte) i que s'inscriuen en la proporció general que es desprèn del conjunt dels coeficients emprats pel PR; i dades, al capdavant, que la memòria d'aquest instrument de gestió vinculà especialment a una reserva per a sistema viari que té per finalitat donar servei al sòl comercial concentrat i que planteja costos unitaris d'urbanització superiors als de la resta del polígon. Consideracions, totes elles, que la perít judicial potser hauria d'haver contrastat amb el Projecte d'urbanització del polígon.

Per tot això, haurem de donar per bons els coeficients de repercussió de la urbanització que es contenen en el PR.

C: Sobre el coeficient d'ocupació:

La pericial judicial considerà que aquest coeficient no tenia recolzament normatiu. Tanmateix, haurem de discrepar d'aquesta conclusió.

Certament, l'art. 140 RU remetia a les regles de ponderació establertes per l'art. 37 del text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU) i l'apartat 5.b) d'aquest precepte legal no citava expressament el factor d'ocupació entre els cridats a ponderar l'aprofitament urbanístic; tanmateix, aquest factor es podia considerar implícitament inclòs en un camp semàntic més ampli, perfectament definit per la conjunció d'expressions tals com "rigidesa a la demanda", "repercussió admissible del valor de la urbanització", "intensitat dels usos", o "localització" (localització, amb les condicions que ja hem vist). Expressions, totes elles, previstes al cap i a la fi per tal d'assolir la valoració més fidel i exacta possible dels béns i drets concernits per la reparcel·lació. I, des d'aquesta perspectiva, resulta innegable que el percentatge d'ocupació del sòl en sòls industrials, comercials o de serveis (i molt especialment envers la planta baixa) havia de contribuir a aquilatar o a arrodonir en un grau apreciable o no menor factors com per exemple el de "rigidesa a la demanda".

En l'anterior sentit, són il·lustratives les explicacions donades envers el coeficient d'ocupació a través de les pàgines 15 i 16 de la Memòria explicativa del PR.

D: Sobre el valor de mercat:

Per últim, assenyalar que la pericial judicial també discrepà del PR en allò que pertocava al valor del sòl.





L'estudi incorporat al PR considerarà que el preu del sòl comercial era un 20% superior al del sòl industrial i en canvi la pèrit elevà aquesta diferència al 297,6%.

La pèrit judicial partí de preus o valors teòrics extrets del BEC i dels barems aplicats pel Col·legi oficial d'arquitectes de Catalunya; tanmateix, l'arquitecte que realitzà l'estudi incorporat al PR, es basà en vint-i-sis mostres de sòl industrial i disset de sòl comercial, territorialment molt properes; amb ponderació d'obra nova i segona ma; i amb identificació de les fonts d'informació, la qual cosa ens obligarà a considerar que aquest estudi gaudeix de més adherència a la realitat immediata i que per aquest motiu haurà de prevaler.

Per tot això, i en els estrictes termes de la present controvèrsia, les apel·lacions plantejades hauran de prosperar."

De tota manera, les consideracions precedents -les fetes a propòsit dels coeficients d'homogeneïtzació-, en el present supòsit hauran de ser interpretades amb prudència i "en els estrictes termes de la controvèrsia" que es plantejà en el procediment resolt en primera instància pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17; perquè com veurem més endavant, s'imposarà la confecció d'un nou Projecte de reparcel·lació, la tramitació del qual obligarà a replantejar novament l'aplicació dels coeficients d'homogeneïtzació. Coeficients, aquests, que no s'escau considerar impropis, per principi, de les reparcel·lacions econòmiques; perquè el fet que en aquestes no hi hagi desplaçaments parcel·lars, no vol dir que no s'hagin de corregir inequitats d'origen, derivades dels aprofitaments assignats pel planejament, així com de les càrregues a assumir. Aprofitaments i càrregues que podran tenir una textura diferent per motius molt diversos, fins al punt de fer imprescindible una ponderació de valors i circumstàncies. Una ponderació, al capdavall, susceptible de conduir a un resultat equitatiu, ni que sigui a través de mecanismes monetaris i purament compensatoris.

SISÈ: En allò que pertoca a les quotes d'urbanització avançades, o ja satisfetes com a conseqüència dels expedients de reparcel·lació del Sector que haurien estat invalidats judicialment, no cal dir que les pretensions de l'actora hauran de ser acollides.

En la mesura que es tracta de diners afectats al sosteniment de les despeses d'urbanització, hauran de rebre el tractament propi d'aquestes; i les sumes satisfetes pels interessats, hauran de consignar-se i individualitzar-se a tots els efectes en el compte de liquidació del proper Projecte de reparcel·lació. Dit, això, sens perjudici que l'expedient iniciat per l'Ajuntament en data 10 de juliol de 2012, pugui ser d'alguna utilitat al respecte.

SETÈ: També haurà de prosperar la pretensió relativa a la data determinant de la legislació aplicable a l'expedient de reparcel·lació. En aquest sentit, serà suficient amb donar per reproduïdes les consideracions fetes per aquest mateix Tribunal a través de la Sentència transcrita en el fonament jurídic tercer per tal de descriure el primer al·legat de l'apel·lació. Sentència, aquesta, recaiguda en l'apel·lació núm. 317/2012.

La data en qüestió, doncs, haurà de ser la del 28 de juny de 2005. Es tracta, al capdavall, de no fer recaure en la comunitat reparcel·latòria els inconvenients o els desavantatges que se'n derivarien de prendre en consideració una data posterior; això últim, a més, com a conseqüència d'irregularitats de l'expedient reparcel·ladori original, no imputables als particulars concernits.

L'apel·lació, doncs, haurà de ser estimada.





VUITÈ: De conformitat amb allò que es desprèn de l'art. 139.2 LJCA, no s'imposaran costes".

CUARTO. Ya se ha adelantado que la mercantil actora desiste en conclusiones de las pretensiones articuladas en el apartado segundo, d) y g), del suplico, esto es "*Segundo.- Que se condene al Ayuntamiento a rectificar el Proyecto de Reparcelación recurrido y, consecuentemente a reiterar el trámite de información pública previamente a su nueva aprobación definitiva, los siguientes aspectos del Proyecto de Reparcelación por ser contrarios al ordenamiento jurídico*": "d) *Exclusión de la imputación a la comunidad reparcelatoria de los costes de urbanización correspondiente a los sistemas generales tales como el encauzamiento del Canal Sedó o la ampliación del Parque que se efectúen fuera del ámbito del Sector*"; "g) *Que este derecho de crédito, del que es titular mi mandante, debe constar en la casilla K <Despeses anticipades> del Cuadro n. 4: <Compte de Liquidació Provisional> del Proyecto de Reparcelación aprobado inicialmente, en la fila A correspondiente a la Comunitat de Propietaris 75.1-75.28 (Finca Matriz 15844); de tal modo que se aplique proporcionalmente a todas las entidades de la finca 75 hasta alcanzar un saldo de o para cada entidad, procediéndose a entregar el saldo diferencial que resulte a mi mandante, toda vez que una vez satisfechos los gastos de urbanización se habrá extinguido la prenda constituida en favor de Coperfil Group*".

Amén de la pretensión anulatoria de los actos recurridos del apartado primero del suplico de la demanda, procede el examen del resto de pretensiones subsistentes articuladas en su apartado segundo, esto es la condena al Ayuntamiento demandado a rectificar el proyecto de reparcelación y a reiterar el trámite de información pública previamente a su nueva aprobación definitiva en relación a los siguientes aspectos: "a) *Fecha de inicio del expediente de reparcelación: 15 de*





julio de 2003"; "b) Fecha de referencia de las valoraciones efectuadas: 15 de julio de 2003. Lo que comportará que la normativa de valoración aplicable sea la Ley 6/1998"; "c) Supresión de los coeficientes c) y d) a efectos de determinar la participación de las diferentes propiedades en los costes de urbanización"; "e) Incorporación a la cuenta de liquidación provisional de las cantidades percibidas hasta la fecha por el Ayuntamiento, ya sea en concepto de cuotas de urbanización o de contraprestaciones convenidas con sus correspondientes intereses"; "f) Reconocimiento de Camier Dos Mil, S.L. como titular del derecho de crédito que ostenta de 2.873.056,49 Euros más los correspondientes intereses devengados desde la fecha de la primera aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación"; y "h) Condena al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca al pago de los intereses devengados por las cuotas de urbanización percibidas en base al Proyecto de Reparcelación declarado nulo, desde la fecha de su percepción hasta la fecha en que de conformidad al nuevo Proyecto de reparcelación sean giradas a los adjudicatarios de la fincas. Reconocimientos de dichos derechos de crédito de los adjudicatarios correspondientes en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación".

Bien, la controversia acerca de la fecha determinante de la legislación aplicable al expediente de reparcelación viene resuelta por la sentencia número 333/2017, de 6 de junio (recurso de apelación 296/2015), a tenor de lo razonado en su Fundamento de Derecho Séptimo, con remisión a su vez a la sentencia número 376/2013, de 10 de mayo (recurso de apelación número 317/2012), sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, más arriba reproducidas y acerca de cuyo alcance y trascendencia en este proceso han podido pronunciarse las partes. Concluye el alto Tribunal que dicha fecha ha de ser el 28 de junio de 2015, de tal suerte que resuelve "3.- Disponar que L'Il·lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramiti i

28/32





aprovi un nou Projecte de reparcel·lació, sotmès en llurs determinacions a la legislació vigent en data 28 de juny de 2005". También se pronuncia aquella sentencia número 333/2017 sobre los coeficientes de homogeneización aplicados en el proyecto de reparcelación objeto de impugnación, si bien con los matices expuestos en el párrafo final del Fundamento de Derecho Quinto ("perquè com veurem més endavant, s'imposarà la confecció d'un nou Projecte de reparcel·lació, la tramitació del qual obligarà a replantejar novament l'aplicació dels coeficients d'homogeneització. Coeficients, aquests, que no s'escau considerar impropis, per principi, de les reparcel·lacions econòmiques; perquè el fet que en aquestes no hi hagi desplaçaments parcel·laris, no vol dir que no s'hagin de corregir inequitats d'origen, derivades dels aprofitaments assignats pel planejament, així com de les càrregues a assumir. Aprofitaments i càrregues que podran tenir una textura diferent per motius molt diversos, fins al punt de fer imprescindible una ponderació de valors i circumstàncies. Una ponderació, al capdavant, susceptible de conduir a un resultat equitatiu, ni que sigui a través de mecanismes monetaris i purament compensatoris"). Asimismo, se pronuncia dicha sentencia número 333/2017 sobre las cuotas de urbanización ingresadas por el Ayuntamiento, en su Fundamento de Derecho Sexto, lo que se traslada a la parte dispositiva en el sentido de que al disponer la tramitación y la aprobación de nuevo proyecto de reparcelación ordena que su cuenta de liquidación habrá de incorporar y tomar en consideración por añadido las cuotas de urbanización ingresadas por el Ayuntamiento como consecuencia o a cuenta de los instrumentos de equidistribución del sector invalidados con anterioridad. Concretamente, en el supuesto particular de autos resulta de la mayor relevancia el pronunciamiento contenido en la sentencia número 376/2013, a tenor del cual, "SEGUNDO. Acordar la ejecución forzosa de las sentencias de 29 de junio de 2009 y 23 de junio de 2010 , con la adecuación del nuevo instrumento de gestión aprobado a sus determinaciones en cuanto al marco normativo aplicable, Ley

29/32





2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, Ley 3/1998, de 13 de abril, y Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y en relación al reconocimiento del derecho de la aquí apelante de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo valor se ha fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales, rechazando las demás pretensiones", pronunciamiento éste dictado en sentencia firme y del que se predica el efecto de cosa juzgada. Por lo que habrá que estar a la indemnización correspondiente a la ejecución anticipada de las obras de urbanización fijada por aquella sentencia firme a favor de la aquí actora en 2.200.000 euros.

Por lo que procede estimar en parte el recurso contencioso administrativo número 483/2012-A, interpuesto por Camier Dos Mil, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva), en el sentido de anular dichos actos administrativos, disponer que el Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramite y apruebe un nuevo proyecto de reparcelación sujeto en sus determinaciones a la legislación vigente en fecha 28 de junio de 2005, que habrá de incorporar y tomar en consideración las cuotas de urbanización ingresadas por el Ayuntamiento como consecuencia o cuenta de los instrumentos de equidistribución invalidados con anterioridad, con reconocimiento del derecho de la actora de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo valor se fija en 2.200.000 euros, más los intereses legales. Y desestimar el recurso en todo lo demás.





QUINTO. Según el artículo 139 de la vigente Ley 29/1998, *“En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad”*. Conforme a dicho precepto, es menester señalar que no se aprecian circunstancias que justifiquen un pronunciamiento especial en materia de costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes, se dicta el fallo siguiente.

FALLO.

Estimar en parte el recurso contencioso administrativo número 483/2012-A, interpuesto por Camier Dos Mil, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva), en el sentido de anular dichos actos administrativos, disponer que el Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramite y apruebe un nuevo proyecto de reparcelación sujeto en sus determinaciones a la legislación vigente en fecha 28 de junio de 2005, que habrá de incorporar y tomar en consideración las cuotas de

31/32





urbanización ingresadas por el Ayuntamiento como consecuencia o cuenta de los instrumentos de equidistribución invalidados con anterioridad, con reconocimiento del derecho de la actora, Camier Dos Mil, S.L., de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo valor viene fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales. Y desestimar el recurso en todo lo demás. Sin costas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de apelación, al amparo del artículo 81 de la Ley jurisdiccional, a interponer a través de este Juzgado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación de esta resolución, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en las que se fundamente el recurso.

Así, por esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales, llevándose el original al Libro correspondiente de este Juzgado, lo pronuncia, manda y firma Juan Antonio Toscano Ortega, magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona y provincia.

PUBLICACIÓN. El magistrado titular de este Juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.

